SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 24/2013

Recomendación N°	24/2013
Autoridad Responsable	Secretario de Educación Procurador General de Justicia del Estado
Expediente	1VQU-0313/2012
Fecha de emisión/	21 DE NOVIEMBRE DE 2013
HECHOS	
<p>El 10 de noviembre de 2012, este Organismo Estatal recibió la queja que presentó Q1 en favor de su hija V1, menor de edad, entonces estudiante de la Escuela Primaria 1, ubicada en la cabecera municipal de Rayón, San Luis Potosí.</p> <p>La quejosa señaló que el 7 de noviembre de 2012 aproximadamente a las 17:00 horas, se disponía a bañar a su hija, cuando se percató que traía manchas de sangre en su ropa interior, por lo que al preguntarle que le había sucedido, la niña en un inicio le dijo que se había caído y golpeado en una piedra, pero al no guardar lógica la respuesta con los hallazgos encontrados en su ropa, llevó a la menor con una doctora, quien le comentó que la niña presentaba signos de abuso sexual.</p> <p>Ante esa situación, tanto la doctora como Q1 dialogaron con V1 para preguntarle la manera en que habían aparecido las manchas de sangre en su ropaje, y la niña les refirió que ese mismo día por la mañana, AR1, profesor de educación física de la Escuela Primaria 1, se encontraba en el baño de mujeres al que ella había acudido, y que le bajó el pants junto con la ropa interior, para de inmediato relatar que el profesor le introdujo “algo” en su vagina, lo cual le había dolido mucho y que había gritado, pero consideró que nadie la escuchó debido a que los baños están retirados de los salones. Finalmente, la menor de edad dijo que AR1 la amenazó con matarla a ella y a su familia si denunciaba lo ocurrido.</p> <p>Por lo anterior, Q1 se presentó en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rayón, para denunciar los hechos y posteriormente le informaron de la detención del presunto responsable, por lo que acudió ante el Agente del Ministerio Público con sede en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Media para presentar la denuncia penal correspondiente, dando inicio a la Averiguación Previa 1.</p> <p>Por otra parte, la quejosa señaló que tuvo conocimiento que a AR1 se le otorgó una licencia por comisión sindical sin goce de sueldo, la cual cubre del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año 2013, circunstancia que considera irregular, ya que se encontraba privado de su libertad con fecha anterior a la licencia, y que este aspecto debe ser investigado por la autoridad de educación del Estado.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la libertad sexual. ✓ A la igualdad y trato digno. ✓ A la educación.
OBSERVACIONES	
<p>en la escuela se debe erradicar toda forma de abuso físico o mental, descuido, maltrato o trato negligente, ya que no existe justificación de que en sus espacios se vulnere la dignidad o la integridad de los alumnos, con la</p>	

omisión o tolerancia de quien tiene a su cargo su custodia, tomando en cuenta que por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado, a fin de que puedan tener un desarrollo integral y gozar de los derechos humanos.

Asimismo, este Organismo Estatal destaca la importancia del derecho que tienen las niñas a vivir libres de violencia; así como las obligaciones que tienen los servidores públicos de garantizar un ambiente educativo sano y de respeto a los derechos humanos. Esta situación se traduce, no sólo en obligaciones de no hacer o de respeto a los mismos, sino en acciones efectivas para prevenir y evitar el abuso y violencia en los centros educativos.

Es por ello que el presente pronunciamiento se emite con el propósito de destacar la importancia que tiene el hecho de que los servidores públicos, particularmente aquellos que desarrollan su actividad laboral en los centros educativos, asuman con responsabilidad el servicio público que tienen encomendado, haciendo frente a cualquier tipo de violencia escolar, o de cualquier otra conducta que pueda vulnerar la integridad física y emocional de las y los estudiantes durante su estancia en las escuelas, que impidan o perturben su sano desarrollo.

De acuerdo con la queja que presentó Q1 ante este Organismo Estatal, el 7 de noviembre de 2012, V1 acudió a la Escuela Primaria 1, y por la tarde de ese día cuando decidió darle un baño, se percató que su ropa interior presentaba manchas de sangre, que al preguntarle por ese hecho la niña le señaló que se había caído, por lo que al no encontrar lógica en la respuesta decidió llevarla con una doctora particular y fue en ese momento cuando se percató que había sufrido una agresión sexual, y que el responsable de ello había sido AR1, profesor de educación física del citado centro educativo.

En su relato de los hechos ante Q1 y la doctora que le practicó la primera revisión médica, V1 realizó un señalamiento directo en contra de AR1, como la persona que la atacó sexualmente, al referir que el día de los hechos, cerca de las 11:00 horas, ella se dirigió al baño de las niñas y en ese lugar se encontraba el profesor quien le quitó su pants y ropa interior, procediendo a introducirle su miembro viril en la vagina. Que el acto se realizó cerca de uno de los lavabos, que le dolió y gritó pero no recibió auxilio debido a que los baños están retirados de los salones, y que AR1 la amenazó para que guardara secreto de ese hecho, ya que de no hacerlo mataría a su familia, e incluso a ella misma.

La declaración que V1 rindió dentro de la Averiguación Previa 1, guarda concordancia con el relato que hizo a su madre y a la doctora, volvió a referir las amenazas que recibió por parte de AR1, para que no denunciara el hecho, incluso al serle puesto a la vista una figura del cuerpo humano masculino, señaló al miembro viril, como el “palito” al que hizo referencia el profesor que le introduciría. Aunado a lo anterior, en diligencia posterior, V1 acompañó a la Agente del Ministerio Público y señaló el lugar de los hechos en que sufrió el ataque.

Los elementos antes descritos concatenados entre sí, aunados a la valoración ginecológica que practicó una doctora el mismo día de los hechos, en la cual se advierte que V1 presentó desfloramiento reciente con eritema vaginal en labios mayores y menores, dolor de hipogastrio a la palpación, así como la presencia de líquido blanco al parecer esperma, dan fortaleza y corroboran lo denunciado por la agraviada del ataque que sufrió y

del responsable del mismo.

Aunado a lo anterior, de la evidencia que se recabó al respecto y que se integró en la Causa Penal 1, con la ratificación de la valoración ginecológica que realizó una profesional en medicina el día de los hechos, quien certificó el desfloramiento reciente que sufrió V1, que fue indicativo de una introducción vaginal, se observó que la profesionalista declaró que la vagina de la menor V1 se encontraba sumamente eritematosa, circunstancia que no era propia de una rozadura, y que la equimosis y la dilación del introito vaginal, correspondían a una penetración.

Refuerza lo anterior el peritaje que rindió un perito químico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien realizó un análisis de las manchas que se encontraban en la ropa interior que V1 vestía el día de los hechos, de cuyo resultado arrojó que esas manchas sí correspondían a sangre humana y que se trataba del grupo sanguíneo de la víctima, circunstancia con lo cual fortalece tanto lo denunciado por V1, como la certificación médica sobre la introducción vaginal.

Los elementos anteriores fueron tomados en consideración el Juez de la causa penal, para emitir el Auto de Formal Prisión en contra de AR1, al precisar que la existencia del señalamiento directo es importante por la propia naturaleza del delito perpetrado, al tratarse de aquéllos que por lo general se cometen a escondidas o sin la presencia de testigos, y de acuerdo con lo que se certificó en la Averiguación Previa 1, los baños de la Escuela Primaria 1 están retirados de los salones de clases, lo cual fortalece la declaración de V1, en el sentido de que gritó y no recibió ayuda, lo cual pudo ocurrir al no escucharse sus gritos. Cabe precisar que el Auto de Formal Prisión fue confirmado por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver la apelación.

Ahora bien, resulta pertinente señalar que dentro de la Causa Penal 1, corren agregados los resultados de estudios químicos para identificar la presencia de líquido seminal de las muestras que se tomaron a V1, así como del lavado peneano que se practicó a AR1. De acuerdo con el reporte que remitió un perito químico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que en ambos casos no se identificó presencia de líquido seminal ni de espermatozoides.

Sobre el particular, es importante señalar que la muestra contenida en los hisopos, misma que le fue tomada a V1 el día de los hechos por parte de la doctora que la practicó la valoración ginecológica, en su dictamen el perito químico forense, en su dictamen marcado con el oficio de QF-1778/12 de 9 de noviembre de 2012, precisó que no fue posible realizar el estudio ya que una de las caras de las laminillas estaba cubierta con cinta adhesiva, y la otra cara no contenía la presencia de muestra. Lo anterior significa un error en la toma de la muestra; sin que el estudio sea un indicativo esencial relativo al desfloramiento que sufrió V1.

En cuanto al segundo estudio, AR2, perito químico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su dictamen QF-1779/12 de 9 de noviembre de 2012, relativo a la presencia de líquido seminal en la muestra de lavado peneano realizado a AR1, precisó que no fue posible dar cumplimiento al estudio solicitado, ya que la búsqueda de células vaginales se realiza mediante un estudio citológico y no se cuenta con área de patología. Lo anterior llama la atención, debido a que la falta de este estudio no permitió que se realizara una

investigación efectiva del caso, aunado a que no se advirtieron acciones por parte del perito para solicitar apoyo a efecto de que el mismo se llevara a cabo.

En otro aspecto, de la evidencia que se recabó se advierten dos valoraciones psicológicas que le fueron practicadas a V1, por personal especializado en determinar la violencia familiar y delitos sexuales, mismas que se integraron a la Averiguación Previa 1, las cuales concluyen que la agraviada presenta sentimientos de tristeza, vulnerabilidad, enojo, estrés, confusión, conflicto de tipo sexual relacionado con el evento vivido, y se recomienda llevar una terapia psicológica para prevenir una mayor alteración en su desarrollo psicosexual.

Los resultados anteriores son coincidentes con la opinión en materia psicológica emitió una servidora pública de este Organismo Estatal de profesión Psicóloga, en la cual señala que V1 presenta una afectación grave derivada de los eventos de violencia sexual ejercidos en su contra; que manifiesta un pobre concepto de sí misma, así como dificultades para identificar su rol como figura femenina de manera adecuada por miedo a que el evento vuelva a repetirse. Por tal motivo, recomienda continuar con la terapia psicológica con tiempo mínimo de un año, a efecto de resarcir el daño en sus esferas, para lograr un sano crecimiento en su desarrollo psicosexual, familiar y social.

En esta tesitura, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió V1, se evidenció la alteración de su interés superior al quedar en riesgo su integridad y sano desarrollo. Al respecto, el interés superior del niño, principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, implica que las niñas, niños y adolescentes, reciban una consideración especial, ampliando la debida protección legal en los casos de actos o ataques que atenten contra su desarrollo integral, su dignidad personal, su integridad física, psíquica y social.

Es importante señalar que derivado de los acontecimientos del 7 de noviembre de 2012, la menor V1 se vio afectada en su esfera psicoemocional, pues su madre Q1 se vio en la necesidad de solicitar un cambio de escuela en favor de su hija, a fin de que a fin de que las manifestaciones realizadas por el cuerpo docente, no repercutieran en su desarrollo emocional y académico. De la evidencia no se advierte que se haya apoyado a las víctimas en terapias psicológicas.

Lo anterior debido a que después de denunciados los hechos en contra de AR1, los demás profesores que se encuentran en la Escuela Primaria 1, comenzaron a hacer comentarios despectivos hacia Q1 y su menor hija V1, incluso mencionaron que se brindaría el apoyo necesario a su compañero AR1, sin mostrar un interés por la estabilidad física, psíquica y emocional de la víctima. Circunstancia que debe ser investigada, tomando en consideración la protección de los derechos de las niñas y niños que estudian en la Escuela Primaria 1.

En otro orden de ideas, de acuerdo con la evidencia se constató que los hechos ocurrieron en horario escolar y que AR1 ostenta el carácter de servidor público, como lo corroboró la autoridad educativa en su informe al precisar que era profesor de educación física. En este sentido, AR1 incumplió con la prestación del servicio público en materia de educación, ya que con su conducta faltó al deber de dar un trato digno y respetuoso a V1, además de omitir garantizarle el ejercicio de los derechos de estar libre de violencia física, sexual, moral y psicológica.

Por lo que hace al personal que labora en las instituciones educativas, este Organismo Estatal considera que es indispensable que cuenten con el perfil adecuado que garantice los objetivos de los centros escolares; que no solamente se le capacite, sino que también existan ciertos criterios de contratación, orientados a que la persona que se va a integrar, sin distinción en el cargo o puesto que va a ocupar, ya sea docente, administrativo, de intendencia o seguridad escolar, reúnan el perfil para trabajar con niñas y niños.

Esta Comisión Estatal afirma que la eficaz y oportuna protección del interés superior del niño se garantiza con la intervención de personal calificado y adecuado, como en el caso que nos ocupa, la persona debe contar con un perfil para tratar con niñas y niños, de acuerdo con su edad y desarrollo, así como velar por la debida protección de sus derechos.

No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal, que AR1 se encuentra actualmente interno en la cárcel distrital de Cárdenas, y que tal circunstancia no debe ser óbice para que se inicie y en su caso se determine el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa por los hechos cometidos. Lo anterior sin detrimento de los derechos que en el orden del debido proceso le corresponden, en particular de audiencia y defensa. Lo importante del caso, es que el caso se investigue y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.

Es de llamar la atención que en el peritaje de química forense para determinar la presencia de líquido seminal en las laminillas e hisopos presentados, AR2 haya considerado que no fue posible realizar el estudio debido a que una de sus caras estaba cubierta con cinta adhesiva, por lo que no cumplía con las características apropiadas para el desarrollo de la técnica empleada en ese laboratorio; luego entonces, lo correcto es que debió solicitar el apoyo para que se realizara tal estudio, lo cual no aconteció, perjudicando con ello la correcta investigación.

Por lo que hace al dictamen pericial para determinar la presencia de líquido seminal así como células vaginales de la muestra tomada a AR1, el perito consideró que no pudo dar cumplimiento al estudio solicitado para la búsqueda de células vaginales, ya que el mismo se realiza a través de un estudio citológico y que esa Dirección de Servicios Periciales no cuenta con área de patología; sin embargo, no se observó que haya realizado alguna acción tendiente a enviar las muestras a servicios periciales de la Procuraduría de Justicia como apoyo para que se llevara a cabo, lo cual también perjudicó la investigación, emitiendo un dictamen en el que concluyó que no se encontró líquido seminal ni células vaginales en las muestras, cuando lo cierto es que no realizó el estudio.

Por tal motivo debe iniciarse una investigación de carácter administrativo tendiente a determinar la responsabilidad en que haya incurrido AR2, por las acciones u omisiones descritas anteriormente, para que en el ejercicio de sus atribuciones, la autoridad correspondiente deslinda la responsabilidad y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda.

En consideración de esta Comisión Estatal, los hechos que dieron origen a la presente recomendación alteraron el proceso educativo de V1, y de no repararse este daño impedirá a la niña contar con un sentido de pertenencia sólido hacia la sociedad a la que pertenece, y podría dejar un efecto negativo permanente por haber sido utilizada como un medio de satisfacción por parte de AR1, ya que en lugar de respetar su dignidad la

convirtió en objeto de manipulación, quien en su carácter de trabajador de la educación, estaba colocado en una posición de poder en relación con la víctima a la que estaba obligado proteger.

En el caso Caso Ximénes López Vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, párrafos 207 y 210, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente en términos del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución. Que las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.

En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular del derecho de los niños, a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar.

RECOMENDACIONES

Secretario de Educación:

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que repare el daño ocasionado, que se traduzca en una compensación justa, que incluya tratamiento médico y psicológico que requieran V1 y Q1.

SEGUNDA. Gire las instrucciones al Órgano de Control Interno a fin de que se inicie el procedimiento administrativo tendiente a determinar la responsabilidad en que incurrió AR1, por las conductas descritas en este documento.

TERCERA. En el marco de sus atribuciones, proponga o realice las modificaciones normativas pertinentes para que la contratación de personal para laborar en los planteles educativos de educación básica, se realice previa evaluación técnica y psicológica.

CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a la plantilla docente y administrativa de la zona escolar de Rayón, San Luis Potosí, referentes al derecho de los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar.

Procurador General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Gire las instrucciones al Visitador General de esa Procuraduría General de Justicia, para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el Órgano de Control Interno, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudiera haber incurrido AR2, tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las gestiones a fin de que a las áreas de servicios periciales de las Subprocuradurías Regionales de Justicia en el Estado, se les proporcione equipo de laboratorio, instrumentos, reactivos químicos, y materiales que sean indispensables para los estudios y análisis que son necesarios para toda investigación efectiva, o en su caso, se destinen recursos económicos para que se realicen de manera oportuna.